

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*

OEA (CIDH):

- **CIDH urge erradicar la tortura, con especial enfoque de género, y condena este tipo de actos contra personas presas políticas.** En ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a adoptar medidas especiales de prevención y combate contra malos tratos y tortura, que cuenten con perspectiva de género y enfoques diferenciados que atiendan los factores de discriminación que pueden incrementar los riesgos de determinadas personas de ser víctimas de este tipo de actos. La CIDH también condena los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sujetos los presos políticos de la región, cuyos familiares son sujetos de hostigamiento y que, junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil, denuncian los hechos sufridos por sus seres queridos, exponiendo su propia vida y su integridad personal. Preocupa a la CIDH que a las restricciones de derechos, las carencias y dificultades generales que sufren las personas privadas de libertad, se añaden otras que derivan de su propia condición –en razón de factores como el género, etnia, discapacidad, orientación sexual, e identidad y expresión de género. Ello, expone a las mujeres y a otras personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a múltiples factores de discriminación que derivan en afectaciones desproporcionadas durante el encarcelamiento, que incluyen también el mayor riesgo de ser víctimas de actos de tortura y otros malos tratos. En particular, la Comisión ha advertido que las mujeres se enfrentan a un riesgo incrementado de ser víctimas de estos actos. A través de sus diversos mecanismos, la CIDH ha sido informada acerca de diversos actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados contra mujeres encarceladas en la región. En particular, estos actos incluirían abuso sexual, patadas por todo el cuerpo, semiasfixias con bolsas de plástico, y amenazas de daño a integrantes de su familia como medio de intimidación. Además, las mujeres se enfrentarían a un margen importante de malos tratos en el contexto de operativos de seguridad dentro de las prisiones. Asimismo, las personas LGBTI, la CIDH ha referido que algunas de las formas más comunes de malos tratos consisten en el uso excesivo de la fuerza, requisas vejatorias y humillantes, hostigamiento, y castigos por muestras de afecto con personas del mismo sexo. Adicionalmente, con frecuencia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans son sometidas a violencia sexual y "feminización forzada", es decir, prácticas que buscan modificar, mediante la violencia, sus orientaciones, identidades y expresiones de género. Además, en algunos casos, las mujeres lesbianas son ubicadas en celdas con hombres como castigo por rechazar las propuestas sexuales del personal de custodia, o sometidas a "violaciones correctivas" para modificar su orientación sexual. Por su parte, las personas indígenas también están expuestas a ser víctimas de abuso físico y verbal por parte del personal penitenciario, como golpizas, tratos humillantes, comentarios de intolerancia y acoso. En cuanto a las personas con discapacidad, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) ha destacado que su condición puede agudizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan ante el riesgo de ser víctimas de tortura. El trato a las personas privadas de libertad debe estar sujeto al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial situación de riesgo que enfrentan, derivada de su misma condición intramural y del control del Estado respecto del ejercicio de sus derechos. En este sentido, la CIDH reitera que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana de las víctimas, así como una negación de los principios internacionales consagrados en distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia. En atención a ello, y considerando que las mujeres y otras personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad se enfrentan a mayor riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos, los Estados tienen el deber de prevenir y combatir este tipo de actos. Ello, a través de la adopción de medidas que contemplen perspectiva de género y un enfoque diferenciado. En este contexto, la Comisión reitera que una perspectiva de género implica tomar en cuenta la situación especial de riesgo a la violencia en todas sus manifestaciones, así como también los riesgos específicos de mujeres que pertenecen a grupos históricamente discriminados. La adopción de enfoques diferenciados se refiere a la realización de acciones especiales que consideren las condiciones particulares –como etnia, condición de discapacidad, orientación sexual, e identidad y expresión de género– de las personas

encarceladas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Finalmente, en ocasión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la CIDH urge a los Estados a desarrollar protocolos de investigación para que los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sean debidamente investigados y juzgados con perspectiva de género y enfoques diferenciados; e incorporar los estándares interamericanos en las capacitaciones a funcionarias, funcionarios y autoridades encargadas de la persecución penal y judicialización. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Argentina (Diario Judicial):

- **Un fallo condenó a una reconocida cadena de comidas rápidas porteña por despedir a una trabajadora por "fea".** La Justicia del Trabajo comprobó la relación laboral, los malos tratos que sufría la mujer por parte del encargado y aseguró que se trató de un caso de mobbing. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena al local de comidas rápidas Williamsburg, ubicado en el barrio porteño de Palermo, que despidió a una empleada por "fea" y lo condenó a abonar las indemnizaciones correspondientes por despido indirecto y violencia laboral. En la causa "D. C. C. M. c/ A. S.A. s/ DESPIDO", la demandante detalló que trabajaba en el local de jueves a domingo de 10.00 a 18.00 horas, percibía una remuneración de \$ 24.880,02 y que recibía órdenes del encargado del local, quien se caracterizaba sus malos tratos. Las camaristas ponderaron además el informe psicológico adjuntado a la causa, el cual detalló que la mujer "al momento de la evaluación es de angustia y vergüenza, a causa de haber sido sometida durante meses a constantes humillaciones, denostaciones y violencia psíquica en su lugar de trabajo, hasta llevar al violento despido; con el consecuente impacto de todo ello en su psiquismo". Durante un turno, el mismo se refirió a su persona frente a los comensales con la frase "que se vaya del local que estaba despedida, que una persona fea no puede ser la cara de Williamsburg", al indagar sobre los motivos de tal decisión, este respondió "te echo por fea". Al día siguiente, cuando regresó a trabajar no se le permitió el ingreso, lo que motivó la demanda para que se registre su situación laboral, y, al no obtener respuesta, se consideró despedida. Si bien la empresa demandada negó los cargos, el Tribunal integrado por María Cecilia Hocki y Gabriela Vázquez tuvo por probada la relación laboral gracias a las pruebas aportadas, como la declaración de testigos que confirmaron que la demandante, efectivamente, era empleada del local. Las camaristas ponderaron además el informe psicológico adjuntado a la causa, el cual detalló que la mujer "al momento de la evaluación es de angustia y vergüenza, a causa de haber sido sometida durante meses a constantes humillaciones, denostaciones y violencia psíquica en su lugar de trabajo, hasta llevar al violento despido; con el consecuente impacto de todo ello en su psiquismo". Agregó que "la situación sufrida ha llevado a que la capacidad de humor-goce-sublimación de la accionante sea escaso, que presenta un disturbio que afecta su esfera afectiva, limitando su capacidad de goce individual, social y recreativo. Finalmente es contundente respecto a que la actora fue víctima de acoso laboral -mobbing- y requiere tratamiento psicológico por no menos de dos años". La sumatoria de los elementos develan que la actora sufrió violencia laboral, afirmaron las camaristas y resaltaron que "debemos remitirnos a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales que encuentra sustento en pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". En ese marco legal, añadieron las juezas, "el maltrato psicológico en el lugar de trabajo constituye violencia contra la mujer y los daños que tal ilicitud produce deben ser reparados plenamente, ya sean patrimoniales o no patrimoniales".

Estados Unidos (Univisión/CNN/AP):

- **La Suprema Corte falla a favor de un entrenador despedido por rezar tras los partidos.** La Corte Suprema falló este lunes a favor de un entrenador de fútbol americano despedido por rezar arrodillado en el campo de juego después de los partidos. Él alegaba que su práctica está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución. "La Constitución y lo mejor de nuestras tradiciones aconsejan el mutuo

respeto y la tolerancia, no la censura y la supresión, tanto para las posturas religiosas como para las no religiosas", señaló Neil Gorsuch, quien escribió la opinión de la mayoría. La decisión fue emitida con el voto de los seis jueces conservadores y la disidencia de los tres magistrados liberales, la misma tendencia que el viernes pasado, cuando fue derogada la histórica sentencia Roe v. Wade, el precedente que estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. El caso hizo a los magistrados de la Corte poner en la balanza la libertad religiosa y de expresión de profesores y entrenadores con los derechos de los estudiantes a no sentirse presionados a participar en prácticas religiosas. Meses atrás, el entrenador Joe Kennedy, quien llevó su caso a las cortes hasta que llegó al máximo tribunal del país, alegó que a él nunca le importó si los estudiantes lo acompañaban en sus rezos y que tampoco les pidió que lo hicieran. La jueza Sonia Sotomayor en su disidencia aseguró que la decisión "nos lleva más lejos, en un peligroso camino al obligar a los estados a enredarse con la religión". Junto a ella, votaron en contra los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan. **¿Libertad religiosa?** El resultado puede suponer el fortalecimiento de la aceptabilidad de determinadas prácticas religiosas en la escuela pública. La decisión es la más reciente a favor de la interpretación expansiva del derecho a la libertad religiosa, como la que estableció que el estado de Maine no podía excluir a las escuelas religiosas de un programa que ofrecía ayuda al pago de la matrícula en escuelas privadas. La decisión de la Corte Suprema a favor del entrenador no parece una sorpresa. En 2019 había rechazado el caso cuando estaba en una fase inicial. Los cuatro jueces conservadores entonces calificaron de "problemática" la decisión del distrito escolar en su contra por cómo entendía "la libertad de expresión de los profesores". El caso resuelto este lunes involucró a Joseph Kennedy, cristiano y exentrenador de la Escuela Secundaria Bremerton de Washington. Kennedy empezó a trabajar como entrenador en Bremerton en 2008. En principio rezaba solo en la línea de 50 yardas al final de los partidos. Pero los estudiantes comenzaron a unírsele y él empezó a darles un breve discurso con referentes religiosos. Así lo hizo durante años, incluso en el vestuario. El distrito escolar supo en 2015 y le pidió que dejara de rezar con los estudiantes. El entrenador dejó de hacerlo con los estudiantes pero siguió rezando él solo en un par de juegos posteriores, dejando a los jugadores la libertad de sumarse o no. Preocupada por la violación a las libertades religiosas, la escuela le pidió que frenara su práctica mientras estuviera en funciones como entrenador. Intentaron hallar una solución de manera que Kennedy pudiera rezar solo antes del juego, pero cuando el maestro siguió arrodillándose para rezar en el campo, la escuela lo puso en vacaciones remuneradas y luego, su contrato no fue renovado.

- **Estos son los 4 casos restantes de la Suprema Corte.** Aunque la Corte Suprema emitió la semana pasada las dos opiniones más importantes de la actual legislatura, modificando un precedente de casi 50 años sobre el aborto y ampliando los derechos de porte de armas por primera vez en una década, esta legislatura tan exitosa no ha terminado. Todavía quedan por decidir cuatro litigios, y el miércoles por la mañana se anunciarán las resoluciones. Un vistazo a lo que queda: **Inmigración: "Permanecer en México".** Los jueces están considerando si el Gobierno de Biden puede poner fin a una política fronteriza de la era de Trump conocida como "Permanecer en México" o "Remain in Mexico". Los tribunales inferiores han bloqueado hasta ahora a Biden para poner fin a la política. Bajo el programa sin precedentes lanzado en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional puede enviar a ciertos ciudadanos no mexicanos que entraron a Estados Unidos de vuelta a México, en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos, mientras esperan a sus procedimientos de inmigración. Los críticos califican esta política de inhumana y dicen que expone a los solicitantes de asilo con peticiones creíbles a condiciones peligrosas y miserables. El caso plantea cuestiones no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control de la política de un presidente y sus relaciones diplomáticas con los países vecinos. **Cambio climático: la autoridad de la EPA para regular las emisiones de las centrales eléctricas.** Los jueces decidirán un caso relativo a la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes, en una disputa que podría perjudicar los intentos del Gobierno de Biden de reducir las emisiones. Se produce en un momento en que los científicos alertan sobre el ritmo acelerado del calentamiento global. La decisión del tribunal de intervenir en el caso preocupó a los ecologistas porque no hay ninguna norma en vigor. Un tribunal inferior eliminó una norma de la era de Trump en 2021 y la EPA del Gobierno de Biden está trabajando actualmente en una nueva norma. Pero el hecho de que haya habido suficientes votos para tratar el asunto ahora, ha sorprendido a algunos como una concesión agresiva, lo que indica que el tribunal quiere limitar el alcance de la autoridad de la EPA incluso antes de que haya una nueva ley en los libros. **Los poderes de guerra del Congreso: la protección laboral de los veteranos.** En otra disputa, el tribunal podría debilitar las protecciones laborales para los veteranos. Le Roy Torres, veterano de guerra y antiguo empleado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, comunicó a la agencia estatal que ya no podía seguir trabajando como policía estatal y buscó un trabajo comparable para adaptarse a su discapacidad relacionada con el

servicio. Cuando se le denegó el trabajo, presentó una demanda al amparo de una ley federal destinada a proteger los derechos de reemplazo de los veteranos que regresan. Pero Texas respondió que los estados son inmunes a este tipo de demandas presentadas en virtud de la Ley Federal de Derechos de Empleo y Reemplazo de los Servicios Uniformados, aprobada en virtud de la autoridad de poderes de guerra del Congreso. Ahora, el tribunal enfrentará la autoridad del Congreso para proveer a la defensa nacional con la capacidad de un estado para decidir cuándo es demandado. El fallo podría afectar a miles de miembros del servicio activo y de reserva de todo el país que trabajan para organismos estatales.

Tierras de los nativos americanos. Víctor Manuel Castro-Huerta, un hombre no nativo americano, fue condenado por negligencia infantil en un caso relacionado con su hijastra, que es miembro de la Banda Oriental de Indios Cherokee. Su condena fue anulada después de que un tribunal de apelación del estado sostuviera que, como el delito se produjo en territorio nativo, el estado carecía de jurisdicción. Ahora el tribunal decidirá si un estado tiene autoridad para procesar a los no nativos que cometen delitos contra los nativos dentro de su territorio. En 2020, en una opinión redactada por el juez Neil Gorsuch y a la que se sumaron los liberales del tribunal, la mayoría sostuvo que Oklahoma no tenía jurisdicción para procesar a un nativo americano que había cometido un delito en territorio nativo.

- **Tribunal revive caso de vacunación de empleados federales.** En un revés para el presidente Joe Biden, una corte federal de apelaciones de Nueva Orleans aceptó el lunes reconsiderar su propio fallo de abril con el que le permitió al gobierno exigir que los empleados federales se vacunen contra el COVID-19. La nueva orden de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans deja sin efecto un fallo anterior de un panel de tres jueces que confirmó el mandato. La nueva orden significa que el bloqueo del mandato impuesto en enero por un juez federal en Texas sigue vigente mientras los 17 jueces con que cuenta la corte examinan la apelación. Biden había emitido una orden el 9 de septiembre que requería que más de 3,5 millones de empleados del poder ejecutivo federal se vacunaran, sin opción de reemplazar la inyección con la realización regular de una prueba diagnóstica, a menos que les fueran aprobadas exenciones por cuestiones médicas o religiosas. El juez federal de distrito Jeffrey Brown, que fue designado a la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Texas por el presidente Donald Trump, emitió una orden judicial a nivel nacional contra el requisito en enero. En ese entonces, la Casa Blanca dijo que 98% de los trabajadores federales ya estaban vacunados. A la decisión de Brown le siguieron una serie de fallos de ida y vuelta en el 5to Circuito. En febrero, un panel del mismo circuito se negó a bloquear el fallo de Brown en lo que se resolvía una apelación. Pero después de escuchar los argumentos en marzo, un panel diferente dictaminó en una votación de 2 a 1 que Brown no tenía jurisdicción en el caso. El panel dijo que quienes impugnaron el requisito podrían haber buscado soluciones administrativas bajo la ley del Servicio Civil. Aunque el fallo se emitió en abril, no entró en vigor oficialmente hasta el 31 de mayo. Los jueces Carl Stewart y James Dennis, que fueron nominados para el 5to Circuito por el presidente demócrata Bill Clinton, conformaron la mayoría. El juez Rhesa Barksdale, nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, no estuvo de acuerdo, alegando que el alivio que buscaban los que impugnaron la ley no está cubierto por la Ley de Reforma al Servicio Civil citada por el gobierno. El gobierno federal argumentó que la Constitución le da al presidente, en su calidad de jefe de la fuerza laboral federal, la misma autoridad que la del director general de una corporación privada para exigir que los empleados se vacunen.

TEDH (Público):

- **El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por filtrar datos policiales de jueces catalanes.** España ha recibido una nueva condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, y ya van unas cuantas, sobre todo en relación a Catalunya. En este caso, el Estado español ha sido condenado por no proteger el derecho a la privacidad de los jueces catalanes cuyas fotos y datos policiales fueron filtrados al diario La Razón, que los publicó el 3 de marzo de 2014 con el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas. El asunto se remonta a febrero de 2014, cuando 33 jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. Poco después, La Razón publicó sus nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, sus ideas políticas. El fallo del Tribunal de Estrasburgo defiende que "la mera existencia de esos informes policiales, sin base legal alguna, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto el artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar)". La sentencia impone una indemnización de 4.200 euros por daños morales y 3.993 por costas y gastos para cada uno de los 20 magistrados que presentaron la demanda ante la Corte europea. El TEDH da por hecho que la filtración de los datos de los jueces se produjo en el seno de la propia Policía. "Las fotografías de los demandantes publicadas en el

periódico procedían de la base de datos policial. No hay otra explicación que la de que las autoridades permitieron que esa filtración fuera posible", concluye el tribunal. Además, el TEDH sostiene que "las investigaciones realizadas sobre las filtraciones fueron insuficientes, ya que al jefe de la Policía de Barcelona, figura clave en la investigación, no se le tomó declaración". Y afirma que esos procedimientos insuficientes "muy probablemente habrían sido útiles para la investigación de los hechos del asunto y hubieran subsanado la injerencia en los derechos de los demandantes". Así, el tribunal "no está convencido de que se haya llevado a cabo una investigación efectiva para determinar las circunstancias en las que los periodistas tuvieron acceso a las fotografías de los demandantes y, en su caso, sancionar a los responsables". El procedimiento penal en España fue llevado, primero, por el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona y se trasladó, después, al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tras su paso por la Audiencia Provincial de Madrid, el caso fue archivado por el juez de instrucción de Madrid "al no poder identificar al responsable de los hechos delictivos de que se trata".

Unión Europea (TJUE):

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-278/20 / Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador). Responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por infracción del Derecho de la Unión: España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad.*** En cambio, el Tribunal de Justicia considera que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en caso de infracción del Derecho de la Unión no vulnera el principio de equivalencia. El principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por las infracciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados. Este principio es válido con independencia de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba la infracción. Los particulares perjudicados tienen derecho a ser resarcidos desde el momento en que se cumplan los tres requisitos para que el Estado incurra en responsabilidad: la norma infringida del Derecho de la Unión debe tener por objeto conferir derechos a los particulares; la infracción de esta norma debe estar suficientemente caracterizada, y debe existir una relación de causalidad directa entre tal infracción y el perjuicio sufrido por los particulares. No obstante, incumbe al Estado, en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad). La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra España basándose en la vulneración de estos principios. A raíz de una serie de quejas formuladas por particulares, la Comisión inició un procedimiento EU Pilot contra dicho Estado miembro, en relación con los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El citado procedimiento, que resultó infructuoso, concluyó y la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra España, en el que solicitaba al Tribunal de Justicia que declarase que dicho Estado miembro había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia. Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, estima parcialmente el recurso de la Comisión y declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor las disposiciones impugnadas, en la medida en que estas someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión: - al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada; - al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin establecer ninguna excepción para los supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación administrativa impugnabile; - a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia, y - al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa. En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que supeditar la reparación, por un Estado miembro, del daño que haya causado a un particular al infringir el Derecho de la Unión a la exigencia de una declaración previa, por parte del Tribunal de Justicia, de un incumplimiento del Derecho de la Unión imputable a dicho Estado miembro es contrario al principio de efectividad de este Derecho. Asimismo, la reparación del daño causado por una infracción del Derecho

de la Unión imputable a un Estado miembro no puede estar subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de dicha infracción. Por consiguiente, la reparación del daño causado por un Estado miembro, incluso por el legislador nacional, como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión no puede estar subordinada, en todo caso, sin vulnerar el principio de efectividad, al requisito de que el Tribunal de Justicia haya dictado con carácter previo una sentencia que declare el incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del Estado miembro de que se trate o de la que resulte la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del acto u omisión que haya originado el daño. En segundo lugar, por lo que respecta a la responsabilidad de un Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión, la persona perjudicada debe dar pruebas de que ha adoptado una diligencia razonable para evitar el perjuicio o limitar su magnitud; en cambio, sería contrario al principio de efectividad obligar a los perjudicados a ejercitar sistemáticamente todas las acciones de que dispongan aunque ello les ocasione dificultades excesivas o no pueda exigírseles razonablemente que las ejerciten. Por consiguiente, si bien el Derecho de la Unión no se opone a la aplicación de una norma nacional que establece que un particular no puede obtener la reparación de un perjuicio que no ha evitado ejercitando una acción judicial, esto solo es posible siempre y cuando el ejercicio de dicha acción judicial no ocasione dificultades excesivas al perjudicado o cuando pueda razonablemente exigirse a este dicho ejercicio. No obstante, cuando el daño deriva de un acto u omisión del legislador contrarios al Derecho de la Unión, sin que exista una actuación administrativa que el particular pueda impugnar, el requisito de que el particular haya obtenido una sentencia firme en un recurso contra la actuación administrativa hace imposible obtener una indemnización, ya que el particular perjudicado no puede interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional. En tercer lugar, por lo que respecta al plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma, dado que la reparación del daño causado como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión no puede estar subordinada al requisito de que exista dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la publicación de una sentencia de esa naturaleza en el Diario Oficial no puede constituir el único punto de partida posible del plazo de prescripción de la acción que tiene por objeto exigir la responsabilidad del legislador nacional por las infracciones del Derecho de la Unión que le sean imputables. Por último, en cuanto al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de una sentencia del Tribunal de Justicia que declare un incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del Estado miembro de que se trate o de la que resulte la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del acto u omisión que haya originado esos daños, este requisito pone trabas a que los particulares perjudicados puedan, en todos los casos, obtener una reparación adecuada de su perjuicio. Si bien corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar la cuantía de la reparación y las reglas relativas a la evaluación de los daños causados por una infracción del Derecho de la Unión, la reparación de los daños causados a particulares por infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido.

Alemania (El Mundo):

- **El acusado de crímenes nazis más anciano, condenado a cinco años de prisión.** Un tribunal alemán ha condenado a cinco años de prisión a Josef Schütz, de 101 años, la persona más anciana juzgada por crímenes nazis, por complicidad de asesinato de miles de personas cuando era guardia en un campo de concentración. Schütz, un antiguo suboficial, fue condenado por "complicidad" en el asesinato de 3.518 prisioneros entre 1942 y 1945 en el campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín. "Señor Schütz usted tuvo un papel activo durante tres años en el campo de concentración de Sachsenhausen donde fue cómplice de asesinatos en masa", declaró el presidente del tribunal, Udo Lechtermann. El magistrado afirmó que por su presencia en el lugar, el acusado apoyó las acciones cometidas en el campo de concentración. "Todas las personas que querían huir del campo fueron fusiladas. Por ende, cualquier guardián del campo participó activamente en estos asesinatos", dijo el juez. Cuando se leyó la sentencia, que es superior a los tres años que contempla el derecho alemán en casos de complicidad con un asesinato, el acusado permaneció estoico. "Estoy listo", indicó Schütz previamente cuando fue trasladado a la sala de la audiencia, vestido con una camisa gris y un pantalón de pijama, sentado en una silla de ruedas. Su abogado ya había anunciado que en caso de recibir una pena muy dura iba a recurrir a una apelación, lo que retrasaría el cumplimiento de la sentencia hasta inicios de 2023. Dada la avanzada edad y frágil salud del acusado, que comparece en libertad, es poco probable que sea encarcelado. Durante ninguna de las cerca de 30 audiencias del caso, el procesado expresó el más mínimo arrepentimiento. El lunes, antes del final del juicio, volvió a negar su responsabilidad. "No sé por qué estoy aquí. Digo la verdad. No tengo nada que ver con la policía o el ejército, todo lo que se dijo es falso", se limitó a decir el acusado, con la voz temblorosa.

España (Poder Judicial):

- **El Tribunal Supremo confirma la absolución de un hombre acusado de colaborar en el suicidio de un amigo que le designó beneficiario de una póliza de vida de casi medio millón de euros.** El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia absolutoria que dictó la Audiencia Provincial de Barcelona respecto a una persona a quien se había acusado de haber colaborado en el suicidio de una persona que había designado a aquél como beneficiario de una póliza de vida, por la amistad existente entre ellos para el caso de que falleciera éste, lo que así ocurrió, por importe de 499.000 euros. En las condiciones de la póliza había una cláusula por la que si existía un suicidio en el primer año tras la póliza no habría cobertura, pero el fallecido se quitó la vida unos días después presentando el beneficiario al cobro la póliza tras el fallecimiento. El tribunal de la Audiencia declaró probado tras la celebración del juicio que “no ha resultado probado, fuera de toda duda razonable, que ninguna otra persona interviniera, directa o indirectamente, en la decisión de quitarse la vida de...”. La sentencia fue recurrida al Supremo por la familia del fallecido y por una compañía seguros, como acusaciones particulares. En la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, formando tribunal como presidente Andres Martínez Arrieta y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer y Susana Polo se recoge que “frente a la pretensión del recurrente de incidir en que quedó constatado el aspecto psicológico de la influencia del acusado en el fallecido, y que todo fue movido por la suscripción de una póliza de seguro de vida con la entidad... en la que ... aparecía como tomador y asegurado y el acusado como beneficiario, sin embargo, no se ha podido concluir por la inferencia obtenida por el tribunal que la suscripción de esa póliza de seguro en la que se fijaba como beneficiario al acusado estaba predeterminada y concertada por ambos para que tras el transcurso del año.... acabara con su vida y el acusado obtuviera un beneficio económico. Esta deducción o inferencia no se ha obtenido por parte del tribunal, ya que lo que se refleja en el resultado de hechos probados sin más son los hechos ocurridos, pero sin constatarse la influencia psicológica del acusado en... para que éste se quitara la vida, y ello no determina una nulidad y una condena que plantea la parte.” Añade el Tribunal Supremo que “refiere el tribunal que la investigación policial manejó la idea de una participación directa del acusado en la muerte de..., pero esa línea de investigación fue abandonada tras conocer el resultado de la prueba pericial caligráfica sobre la nota de suicidio que determinó que la había escrito el fallecido sin intervención de tercera persona. Además, los policías que participan en la inspección ocular señalan que cuando fue hallado el cadáver, la muerte se produjo por un suicidio por ingesta de fármacos, pero el conocer la existencia del seguro de vida se continuó la investigación y en el atestado se fijan doce indicios, señalando que el acusado podría haber tenido influencia en lo ocurrido. Sin embargo, el tribunal realiza una detallada exposición de cuáles son los indicios y elabora un detallado estudio de los concurrentes, pero sin llegar a una conclusión de la suficiencia de los mismos para el dictado de una condena tal como promueven la acusación. Con ello, no puede predicarse la existencia de una condena por lo que se podría calificar como, según se deduce de lo expuesto por el tribunal, una serie de coincidencia de circunstancias, suposiciones o sospechas que pudieran llegar a entender una colaboración del acusado en los hechos, pero resulta evidente que los indicios determinantes de una condena deben tener una entidad calificadora de mayor relevancia, y no debe confundirse que una suma de coincidencias, o sospechas, puede llevar lugar a la existencia de una condena enervando la presunción de inocencia por la concurrencia de indicios que no son jurídicamente tenidos como tales, y ello es lo que concluye el tribunal de una forma motivada, analizando cada uno de los indicios que se han expuesto en el acto del juicio oral, pero descartando que su concurrencia pueda tener la relevancia y entidad suficiente calificadora para determinar el sentido de una condena. Por ello, analizada la sentencia en las doce explicaciones que da el tribunal a la existencia de los alegados indicios determinan una suficiente motivación del rechazo por parte del tribunal a lo que son puntos expuestos por la acusación, pero que no tienen el calibre y calidad de indicios concurrentes para posibilitar una condena. De suyo, lo que hace el tribunal es relatar que la suma de varios indicios inconsistentes no hace que se conforme uno con la suficiencia y consistencia como para desvirtuar la presunción de inocencia, declarando el tribunal que esto es lo que ocurre en el caso que nos ocupa. Expone el tribunal que el indicio principal es la suscripción por parte del fallecido de la póliza de seguro en la que el beneficiario es el acusado. Pero es importante, y así lo destaca el tribunal, que el fallecido acudiera a la agencia de forma aparentemente voluntaria y en solitario, tanto a la firma como las veces en las que tuvo que aportar la necesaria documentación, y esto fue acreditado por la testifical de la empleada encargada de su tramitación. Por otro lado, refiere el tribunal que la inclusión de la cláusula de carencia de un año para el caso de suicidio pudo haberse intentado eliminar mediante pacto en contrario y conllevaba un riesgo de que el hecho se produjera antes del transcurso del plazo, aún en el supuesto de aceptar la maniobra ideada por el acusado que ninguna seguridad podía tener sobre el momento en que... adoptará tal decisión y la llevara a cabo. También, y

esto es evidente, el tribunal declara que la inexistencia de aportación de coartada sobre su localización en el momento en que se produjo la muerte no pueda tener una trascendencia, ya que no se puede obligar a un acusado en un juicio oral a fijar una coartada cerca de donde se encontraba el momento del hecho. Destaca el tribunal que la circunstancia de que reclamara el pago de la indemnización de forma inmediata tampoco es un dato relevante, ya que perfectamente era obvio que podría haber conocido la existencia de la misma y de su carácter de beneficiario, porque se lo habría comentado el fallecido, pero ello no determina la existencia de una presunción de culpa de haber tenido participación directa en el fallecimiento. En definitiva, el tribunal explica de una forma detallada y suficiente las razones por las que entiende que los indicios que se han expuesto por la acusación no tienen el carácter ni suficiencia como para determinar la existencia de una condena por el alegato de una conducta dolosa preconcebida y concertada del acusado con el fallecido, y en un hecho tan grave y lamentable como el ocurrido, pero en el que no puede derivarse una participación de quien fue acusado, como ha expuesto el tribunal, ante la inexistencia de una prueba indiciaria concurrente y concluyente que permita la inferencia de descartar toda duda razonable para permitir el dictado de una condena.”

- **El Tribunal Supremo confirma la condena a 5 meses de prisión a un instructor de los Mossos que hirió de un disparo a una alumna.** El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un agente de policía instructor de formación básica en el aprendizaje de manejo de armas que, en lugar de extraer las balas reales del arma que utilizaba para explicar su funcionamiento, utilizó con imprudencia grave balas reales efectuando un disparo que dio en la pierna de una alumna causándole lesiones graves con pérdida importante de funcionalidad. Consta en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que: “El acusado incumplió su obligación de percatarse de que el cargador estaba puesto. Volvió a correr la corredera, con lo cual el arma quedó preparada para disparar y apuntó hacia delante, donde estaba dentro de su trayectoria la alumna. Presionó el disparador y, por el impacto en sus manos del retroceso del arma, subió ligeramente las manos de forma que el proyectil impactó en el muslo de la pierna derecha de la alumna. La Audiencia le impuso la condena de 5 meses de prisión como autor de un delito de lesiones que causan inutilidad, cometido por imprudencia grave concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos ocurrieron en febrero de 2009 en la Escuela de formación de Mossos d'Esquadra. En la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro, formando Tribunal como Presidente Andrés Martínez Arrieta y los Magistrados Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer y Susana Polo, se recoge que los hechos se confirman calificados como imprudencia grave, y no menos grave que se postulaba en el recurso. En la sentencia, el Alto Tribunal justifica que se trató de una imprudencia grave señalando que: “Hay que señalar en este caso que la calificación de la imprudencia que ha realizado el Tribunal es correcta, según se desprende del resultado de hechos probados y, sobre todo, atendiendo al carácter profesional de quien estaba realizando la enseñanza que, en lugar de utilizar un arma simulada, o sin cargador, se equivoca de forma grave y utiliza un arma cargada y con balas para hacer actos con posibilidad de ser disparado el arma y alcanzar a alguno de los asistentes, como así ocurrió. Incluso, el resultado pudo ser más grave, como el ocasionar la muerte de algunos de los asistentes si la desgracia hubiera tenido como consecuencia que la bala hubiera alcanzado a un órgano vital de alguno de los presentes. Con ello, la falta de previsión y diligencia exigible no puede calificarse como menos grave como postula el recurrente, sino que tiene un perfecto encaje en la gravedad de una imprudencia tal como utilizar un arma cargada y ser disparada alcanzando a uno de los asistentes con la consecuencia lesiva grave que se ha producido y consta en los hechos probados y en la explicación del Tribunal en su sentencia. Nos encontramos en este caso con las siguientes circunstancias que avalan la imprudencia grave: 1.- Se utiliza un arma cargada con balas en un acto de enseñanza acerca de cómo utilizarla en una situación concreta, cuando, obviamente, ello comporta un riesgo grave de que el arma se dispare, como así ocurrió. 2.- La actuación del recurrente le obligaba a utilizar una mayor diligencia y cuidado ante la previsibilidad de un acontecimiento desgraciado como el que finalmente ocurrió y con un alcance lesivo grave que podría haber sido incluso más grave si la bala hubiera alcanzado algún órgano vital. No puede, así, minusvalorarse el alcance de la gravedad del recurrente que utiliza un arma que debía estar descargada, pero lo hace cargada con balas y efectuándose un disparo que alcanzó a uno de los asistentes. 3.- Analiza en este caso el Tribunal las exigencias de prevención que en estos casos deben adoptarse, analizando la prueba testifical respecto a las directrices de los instructores del centro y que se exponen en cada curso referido a que no deben llevar el arma de fuego, y que si la llevan deben hacerlo sin cargador y sin bala en la recámara. Destaca el Tribunal la enorme peligrosidad del instrumento que llevaba entre las manos y que correspondía al recurrente evitar la causación de cualquier riesgo que existe en estos casos si el arma iba cargada, como en este caso lo iba, lo que exigía al recurrente extremar las medidas de seguridad asegurándose de que el arma no estaba en condiciones de ser disparada, y, sin embargo, no lo hizo y se disparó alcanzando a la víctima. El hecho imprudente es muy grave. No puede

admitirse, como destaca el Tribunal, que no se hubiera verificado que el arma no iba con cargador, ya que supone un elevado grado de imprudencia no detectar o comprobar que un arma no está cargada cuando va a ser utilizada ante alumnos a los que se está enseñando actuaciones de protección, o de tiro, por el riesgo de que se disparara el arma. Y, esta, al no adoptar las elementales y básicas medidas de seguridad, al final se disparó, causando el resultado lesivo que consta en los hechos probados. 4.- El Tribunal en el fundamento de derecho quinto determina la calificación de los hechos probados como imprudencia grave, desarrollando un detallado estudio que excluye la existencia de dolo eventual que derivara los hechos a la vía directa del artículo 150 del Código Penal con una pena de prisión elevada, manteniendo los mismos en la calificación de imprudencia grave y exponiendo la jurisprudencia de este Tribunal con respecto a la diferencia entre imprudencia grave y menos grave. Pone de manifiesto la evidencia de que el recurrente ni tan siquiera miró y comprobó si el arma estaba cargada por mucho que alegue lo contrario, ya que se trata de una operación sencilla y fácil que cualquier persona, y más en este caso un profesional, debería haber comprobado, y cerciorarse si el arma estaba cargada o no. No puede entenderse desde un punto de vista del profesional que, simplemente, se vea de forma externa si está cargada o no, sino que debe comprobarse de forma detallada si el arma va con cargador y con bala, o si no va, porque no hacerlo supone una imprudencia grave. Además, el Tribunal destaca claramente que no podía haber confusión porque si no estaba el cargador se vería el suelo. Así, atribuye al recurrente un elevado grado de imprudencia al no cerciorarse previamente ni tan siquiera de si había cargador o no había". En esta sentencia, el Tribunal Supremo efectúa también un estudio acerca de las diferencias entre la imprudencia grave y la menos grave ante todo tipo de supuestos donde se exija un especial deber de cuidado, como aquí lo era y que no existió, y apunta a que el desenlace pudo ser peor: "Resulta evidente que la conducta lo fue por imprudencia grave, ya que al recurrente se le exigía un deber de diligencia y previsibilidad extremo ante el riesgo evidente de que el resultado lesivo ocurriera al utilizarse un arma cargada con balas en unas prácticas con alta previsibilidad de que el arma fuera disparada, como así ocurrió. El riesgo del resultado era máximo al estar el arma cargada y el nivel de previsión en la actividad que desplegó el recurrente era también el máximo que puede existir en una conducta en la que está empleando un arma de fuego cargada cuando debió utilizar un arma simulada. La imprudencia en este caso tiene que ser calificada como grave y no como menos grave, como propone en este caso el recurrente, por el alto nivel de riesgo y la correspondiente alta exigencia de previsibilidad en el recurrente en el uso y manejo de un arma que no debió ser de fuego, sino simulada en el desarrollo de la actividad que estaban desplegando".

Suiza (El País):

- **Un Tribunal condena a Credit Suisse por lavado de dinero procedente del tráfico de cocaína.** Credit Suisse ha sido condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza al pago de una multa de 2 millones de francos suizos (1,98 millones de euros) por las deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en relación con las actividades desarrolladas entre 2007 y 2008 por una organización criminal búlgara. En el caso de la entidad, el Tribunal encontró deficiencias tanto en lo que respecta a la gestión de las relaciones con la organización criminal, como en lo que respecta al seguimiento de la implementación de las normas AMLA (anti-lavado de dinero) por parte de la institución, el servicio legal y el departamento de cumplimiento. "Estos fallos permitieron retirar los activos de la organización criminal", ha indicado el Tribunal para justificar la multa de 2 millones de francos suizos impuesta a Credit Suisse. Asimismo, ha justificado una reclamación de compensación por parte de Credit Suisse de más de 19 millones de francos (18,7 millones de euros), el monto de aquellos activos que no pudieron ser decomisados por deficiencias internas de Credit Suisse. Por otro lado, ha condenado de forma condicional a una ex empleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por blanqueo de capitales cualificado al considerar que la extrabajadora, a cargo de las relaciones con los clientes de la organización criminal en cuestión, ejecutó órdenes de transferencia o las hizo ejecutar entre julio de 2007 y diciembre de 2008 por instrucciones del cliente, aunque existían sospechas sobre el origen delictivo de los fondos. A través de estas órdenes, que en su mayoría se referían a transferencias internacionales, contribuyó a que la organización criminal pudiera evadir más de 19 millones de francos suizos (18,7 millones de euros), señalan las autoridades helvéticas. El Tribunal ha rebajado las sanciones debido a que las infracciones se cometieron hace mucho tiempo y sobreseyó el proceso respecto de alegaciones individuales, ya que el plazo de prescripción había expirado al momento de la sentencia. Por otro lado, ha ordenado la confiscación de más de 12 millones de francos (11,8 millones de euros) en activos mantenidos en las cuentas de la organización criminal en Credit Suisse. "La investigación se remonta a más de 14 años", ha destacado Credit Suisse, añadiendo que "el banco apelará la decisión". En este sentido, ha defendido que está probando continuamente su marco contra el lavado de dinero, fortaleciéndolo con el tiempo, de acuerdo con la evolución de los estándares regulatorios.

Filipinas (EFE):

- **La Suprema Corte entierra el último escollo contra la presidencia de Marcos.** El Tribunal Supremo de Filipinas desestimó este martes una queja contra la candidatura a la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., enterrando el último escollo antes de que este jueves jure el cargo por un mandato único de seis años. Bongbong Marcos, como se conoce afectuosamente al único hijo varón del dictador filipino Ferdinand Marcos, arrasó en las elecciones a la presidencia celebradas el 9 de mayo al sumar más de 31 millones de votos o más del 50 por ciento del total de papeletas emitidas. La justicia filipina determinó, en una decisión de 13 magistrados a favor y ninguno en contra -mientras dos jueces no votaron-, que el candidato estaba "cualificado para concurrir y ser elegido para un puesto público", apunta el organismo en un comunicado. La denuncia contra Marcos Jr. reclamaba la cancelación de su candidatura en base a la deuda que tiene pendiente con la hacienda del país, a la cual debe 3.729 millones de dólares. En 1997, un tribunal filipino le ordenó al presidente electo pagar más de 427 millones de dólares tras ser condenado por evasión de impuestos, una cifra que se multiplicó a raíz de los intereses acumulados durante los últimos 25 años. Durante la campaña previa a los comicios, contrincantes y críticos con Bongbong Marcos denunciaron que los herederos de Marcos padre, muerto en 1989, aún no habían liquidado su pasivo con el tesoro público, pero el entonces candidato presidencial se defendió alegando que la cantidad final de la sanción era negociable. Los Marcos se enfrentan todavía hoy al menos a 40 juicios civiles por supuestos delitos durante la dictadura conyugal de Ferdinand e Imelda Marcos (1972-1986). El gobierno filipino ha conseguido recuperar más de 3.600 millones de la riqueza ilícita acumulada durante sus años de gobierno, y la propia Imelda ha apelado 11 sentencias en su contra que suman 77 años de cárcel por delitos de corrupción. La Comisión Presidencial del Buen Gobierno, la institución pública que se encargó de recuperar la fortuna desfalcada por los Marcos, cifra en entre 5.000 y 10.000 millones de dólares el robo al erario público durante los años de gobierno de Marcos padre.

De nuestros archivos:

**29 de agosto de 2007
China (Reuters)**

- **Demandan a un hospital que separó a dos gemelos hace 21 años.** Dos "gemelos" chinos demandaron a un hospital por una aparente confusión de recién nacidos ocurrida hace 21 años. Con los mismos ojos hundidos y la misma boca ancha, Xiang Nan y Wang Yiwen llegaron a un tribunal de Pekín vistiendo chaquetas idénticas y una camiseta a cuadros, pidiendo la indemnización de un hospital que según ellos hace 21 años confundió a Xiang con otro niño, según informó el miércoles el periódico Beijing Times. El bebé creció como Wang Yiwu, creyendo que era el hermano gemelo de Wang Yiwen. Las dos familias vivían en el mismo distrito semi rural de Pekín y Xiang y Wang Yiwen se conocieron hace dos años, cuando amigos comunes les presentaron sorprendidos por su parecido. Ellos descartaron a finales del año pasado que el parecido fuera una coincidencia, cuando los vecinos se quejaron de que un joven, que pensaban que era Wang Yiwen, los había ignorado. "A menudo la gente decía que cuando veían a Wang Yiwu por el pueblo les ignoraba y no les saludaba," dijo el periódico. "Cuando sus padres le preguntaron a Wang Yiwen, él mencionó a Xiang Nan." Las pruebas médicas han demostrado que Wang Yiwu no tiene relación sanguínea con los padres y el hermano con los que ha crecido, mientras que Xiang Nan tenía un 99,999 por ciento de posibilidades de ser gemelo biológico. Los chicos y sus padres piden un total de 1,16 millones de yuanes (154.000 dólares) de compensación y una disculpa del hospital, que ha dicho que ha pasado mucho tiempo, que el caso ha prescrito y que el reclamo de las familias es "hipotético."

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas

 [@anaya_huertas](https://twitter.com/anaya_huertas)

* El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.